

HERRA82

Las candidaturas y el país

Los candidatos y las candidatas están de acuerdo con la negociación política del conflicto armado, sin condicionar la realización de las reformas económicas, sociales y políticas a que primero se haga el acuerdo con la insurgencia.

Es evidente la coincidencia entre todas las candidaturas acerca de lo que podría ser un nuevo modelo de desarrollo. Pareciera que candidatos y candidatas estuvieran aceptando las tesis de Eduardo Sarmiento o retomando los planteamientos que durante años han repetido las centrales sindicales.

ÓSCAR ALBERTO MOLINA GARCÍA

oscarmolinag@hotmail.com

Especial para **Caja de Herramientas**

Bogotá

Con base en la trayectoria seguida hasta ahora, es posible dibujar el mapa conceptual de la actual campaña presidencial, a partir del perfil y las propuestas de cada candidatura.

Oportuno es saber lo que cada una de las candidaturas ha expresado frente a los más importantes temas del país, pero especialmente sobre dos importantes asuntos: la definición de una estrategia fundamental y las propuestas que tienen sobre el modelo de desarrollo, el proceso de paz y la reforma política.

La campaña presidencial se ha desarrollado en un contexto nacional cuyos rasgos más sobresalientes son:

1. El bajo crecimiento y la casi nula efectividad de las políticas oficiales para reactivar la economía, con la consiguiente agudización de los problemas sociales, como el desempleo;
2. El desprestigio del proceso de paz y el desgaste generalizado de todos los participantes en el mismo, después de haber ocupado en los últimos años el lugar central en el escenario nacional;
3. El alto grado de ilegitimidad de las instituciones estatales, evidenciado en la opinión poco favorable que ha acompañado al Presidente de la República, los hechos de corrupción, la impunidad, la pérdida de credibilidad de la Fiscalía, la falta casi total de seguridad ciudadana, la persistencia de los grupos paramilitares, la incapacidad y ausencia de voluntad para hacer una verdadera reforma política;
4. La amenaza persistente de intervención directa por parte de los Estados Unidos en el conflicto interno, a través del Plan Colombia, sin resultados

positivos en la lucha contra el narcotráfico, y acentuada últimamente en el marco de la guerra internacional contra el terrorismo.

Lo estratégico

De una manera casi imperceptible se ha venido modificando en esta campaña la centralidad de los problemas relativos a la guerra y la paz, al conflicto armado y la negociación política.

Hace tres o cuatro años predominaba la idea de que sin resolver el conflicto interno nada podía hacerse en el país. El gobierno Pastrana convirtió el asunto en su principal frente de acción y aplicó un esquema excluyente de negociaciones con la insurgencia.

Todo el mundo centró su atención en los ires y venires del Caguán y en las monotématicas declaraciones de todos los actores del conflicto, los supuestos y reales voceros de la sociedad civil y los especialistas de todas las tendencias.

La situación es hoy bastante diferente. La violencia generalizada y el deterioro del conflicto armado siguen siendo una preocupación central, pero el enfoque ya no es tanto negociación política *versus* confrontación militar.

La candidata Noemí Sanín habla de la necesidad de “descaguanizar” al país y dar prioridad a las reformas económicas y sociales que no dan espera. Sostiene que no se puede seguir justificando con la negociación política del conflicto armado la falta de producción y empleo, y que se requiere una “estrategia global” para resolver este conflicto, estrategia que también debe incluir el fortalecimiento del Estado y la autoridad.

Según Ingrid Betancur, la violencia en Colombia ha sido un factor de inmovilismo político. Para hacer las grandes transformaciones del Estado no hay que esperar hasta cuando se haya logrado un acuerdo militar con la insurgencia. Y si se legitima el Estado, se fortalece la posición negociadora frente a los alzados en armas. Para esta candidata es prioritaria la lucha contra la corrupción política.

Por su parte, Horacio Serpa sostiene que es necesario asegurar la legitimidad social del sistema. La subversión no depende sólo de la pobreza sino también de ciertas circunstancias políticas relacionadas con la fragilidad del sistema. Se requiere un Estado fuerte: el que goza de la satisfacción ciudadana porque le está cumpliendo. Un Estado fuerte así entendido es mucho más eficaz en la lucha contra la subversión y contra el crimen que un Estado autoritario.

Alvaro Uribe ha logrado un perfil propio con sus tesis de fortalecimiento del Estado, autoridad y seguridad democráticas. Su idea es que ocurra lo que ocurra en las conversaciones con las FARC el país tiene que enfrentar sus problemas. En sus propias palabras, el ejercicio de la autoridad, el buen manejo económico, la

derrota de la politiquería, la derrota de la corrupción, la inversión social, son caminos que conducen a la paz.

Manteniendo una posición que ha identificado a la izquierda, Luis Eduardo Garzón considera que el proceso de paz va más allá de la negociación política del conflicto armado e implica eliminar las causas de éste, es decir, hacer radicales reformas económicas, sociales y políticas, garantizando ante todo la justicia social.

En el mapa de la actual campaña, la candidatura de Garzón simboliza la insistencia en la solución pacífica sin ceder a las presiones de quienes impulsan un mayor escalamiento de la guerra. La propuesta de legalización de las drogas, hecha por este candidato, marca también el contrapunto frente a una política represiva contra la producción de cultivos ilícitos.

Modelo de desarrollo

Sobre todo después de la crisis monetaria del sudeste asiático (1997 – 1999) y de la crisis brasilera (1999 – 2000), a nivel internacional el neoliberalismo y sus agentes fueron puestos en la picota pública, perdieron ante el mundo el brillo de renovadores o ellos perdieron interés en que se les siguiera identificando con el pensamiento único.

Con la recesión de los últimos años en Colombia y el fracaso del actual gobierno en materia de política económica, aquí nadie se reclama “neoliberal”, con la excepción de dos o tres fundamentalistas.

Quedó atrás la euforia de los primeros años 90 y el encendido debate entre neoliberales y socialdemócratas. En el intermedio se habló de un viraje o una rectificación en el modelo y de “ponerle corazón” a la apertura. Pero, en realidad, nada pasó, pues continuó la venta de las empresas estatales, el ajuste fiscal y la apertura comercial indiscriminada hacia adentro.

Todas las recetas de sabiduría convencional se aplicaron, pero el paciente empeoró cada día más. Hoy se proclama que el neoliberalismo está muerto y enterrado, pasado de moda (Noemí Sanín) o se promete sepultar al neoliberalismo en el próximo gobierno (Horacio Serpa).

De modo un tanto enigmático, aunque en cierto sentido con mucha razón, Ingrid Betancur sostiene que hemos tenido un modelo neoliberal virtual. En coherencia con la inscripción del Partido Liberal Colombiano en la Internacional Socialista (IS) y en vista del peso que hoy tienen los gobiernos del occidente y el norte de Europa, el candidato oficial del liberalismo se presenta como socialdemócrata.

Sin embargo, Alvaro Uribe no tiene inconveniente en afirmar que su concepción es socialdemócrata, pero sin clientelismo. Noemí Sanín niega ser neoliberal, afirmando, a la vez, que tampoco es como “algunos” socialdemócratas, y se define como pragmática, con un profundo sentido del Estado y de su contenido social.

En el fondo de la crisis nacional empezó a surgir como “sentido común” la idea de que es necesario darle prioridad al sector real de la economía, al incremento de la inversión productiva, de nuevo con la excepción de tecnócratas al servicio del actual gobierno, de dirigentes gremiales vinculados a los intereses de los grandes grupos financieros y las empresas multinacionales, y de algunos ideólogos ya muy solitarios.

Es evidente ahora la coincidencia entre todas las candidaturas acerca de lo que podría ser un nuevo modelo de desarrollo para el país. Pareciera que candidatos y candidatas estuvieran aceptando las tesis de Eduardo Sarmiento o retomando los planteamientos que durante años han repetido las centrales sindicales.

Desde el punto de vista de Alvaro Uribe, Colombia necesita, ante todo, recuperar la confianza inversionista e incrementar el ahorro interno. Sólo así se podrá erradicar la pobreza y elevar la distribución del ingreso. Una de las herramientas para construir equidad es la economía solidaria. El Estado comunitario constituye una alternativa contra el Estado burocrático y contra el neoliberalismo.

Horacio Serpa ha planteado una estrategia de desarrollo social, dentro de la cual ocupa un papel primordial la lucha contra el desempleo y la creación de condiciones para el trabajo. Menciona un desarrollo social que descansa sobre el desarrollo productivo y la competitividad. En su gobierno realizará, dice, una cruzada por la reindustrialización de Colombia.

El servicio de la deuda no puede seguir como hasta ahora, porque el país se va a “ir al diablo”, hay que realizar todas las gestiones necesarias para lograr que la deuda pública retorne a condiciones manejables. Hay que pagar la deuda, queremos pagarla, la estamos pagando, aclara el candidato.

El gasto público social se financiará con emisión o préstamo del Banco de la República, y con recursos de Ecopetrol, los derivados de la reestructuración de la deuda pública externa convenida con los acreedores y los provenientes de la cooperación internacional con motivo del proceso de paz.

Para Noemí Sanín el nuevo modelo tiene que estar centrado en la generación de empleo, y el crecimiento económico debe ser jalonado por las exportaciones. Es prioritario salvar el sector productivo, proteger y promover la inversión y las exportaciones. Noemí se ha proclamado como la candidata del trabajo, promete generar dos millones y medio de empleos, conseguir un crecimiento económico del 6%, crear 250 mil nuevas empresas y un millón de viviendas, y establecer el seguro de desempleo.

El estímulo a la inversión consistirá en el no cobro de impuestos a la reinversión de utilidades, el freno a la fuga de capitales, la facilidad para la importación (sin aranceles) de bienes de capital y el crédito de fomento. “Lo malo no es el crédito de fomento ni la banca de desarrollo, sino la forma como se administra”, dice. La

crisis de las finanzas públicas se resuelve administrando mejor el recaudo de impuestos, superando la evasión del 24% del IVA y del 40% del impuesto de renta, acabando con los privilegios traducidos en descuentos y exenciones.

Luis Eduardo Garzón ha venido proponiendo un modelo de desarrollo en el cual se privilegie las actividades productivas sobre la especulación financiera, como eje de una política de empleo. Un modelo de economía mixta (sector privado, economía solidaria, sector público), en el cual el Estado asuma sus funciones de regulación y redistribución.

Garzón propone renegociar la deuda pública, interna y externa, y hacer una moratoria mientras se logra este objetivo, o la condonación. De esta manera podrían liberarse recursos para la seguridad social y la inversión productiva, para incrementar los recursos de los entes territoriales y la inversión en las zonas rurales. Considera que está vigente la tarea de hacer una reforma agraria y considera absurdos los planteamientos de quienes dicen que ya no hay tierras que valga la pena repartir.

La propuesta de Ingrid Betancur recuerda un poco la “nueva economía” estadounidense de los años 90: un “capitalismo democrático” o popular, entendido como una sociedad de accionistas, no de asalariados asustados por el peligro de perder el puesto.

En todo caso, la viabilidad de una estrategia de desarrollo más conveniente para los intereses nacionales depende mucho de la voluntad política y de la legitimidad del gobierno, así como de la politización de la sociedad civil. Y es justamente en estos aspectos donde surgen los interrogantes respecto a las candidaturas con mayor opción electoral.

Serpa ha dicho que no se pueden atender sin más los planteamientos o las sugerencias que surjan de lo internacional, que es necesario hablar con las naciones poderosas y los organismos multilaterales, pues se deben tener consideraciones especiales con Colombia y no se pueden universalizar todas las fórmulas.

Para Garzón la clave está en fortalecer la soberanía nacional y la democracia interna, por eso plantea que es necesario, por ejemplo, recuperar el control sobre el régimen de inversión extranjera, promover el control social sobre los fondos privados de pensiones, salud y cesantías, así como revisar el esquema de participación privada en los servicios públicos y suspender los procesos de privatización.

También son inquietantes los silencios y la falta de concreción en las propuestas con respecto a las negociaciones del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas). Al próximo gobierno le corresponderá terminar esas negociaciones y firmar los acuerdos.

Noemí Sanín, en este particular, se ha comprometido “a tener en cuenta a los sectores académicos, privado, gremial y a los trabajadores”.

Ante la inminencia del ALCA, Luis Eduardo Garzón ve la posibilidad de que el país actúe en una articulación andina y latinoamericana y de que la presencia y el fortalecimiento de movimientos independientes en distintos países permitan una nueva interlocución frente a los Estados Unidos.

Serpa considera que es urgente recuperar el liderazgo de Colombia en la integración andina para construir una posición regional en la negociación con Mercosur y coordinada frente al ALCA. El candidato liberal avala la participación empresarial y de la academia en los acuerdos comerciales.

La Reforma política

Las propuestas de reforma política en que más ha insistido Alvaro Uribe son el Congreso unicameral, la eliminación de las contralorías departamentales y municipales y el establecimiento del sistema de regiones autónomas.

Para este candidato, se trata de hacer sólo algunos ajustes a la Constitución. No son muchas las reformas constitucionales que se necesitan y se pueden tramitar a través de un referendo. La verdadera reforma política consiste, según Uribe, en que en el próximo gobierno no simplemente se cambie a los beneficiarios del clientelismo.

Desde una óptica de izquierda democrática, Luis Eduardo Garzón se ha interesado por el tema de la legitimidad del Estado, enfatizando la necesidad de un proceso de construcción de acuerdos entre todos los agentes sociales y políticos, para tomar decisiones fundamentales que hagan viable económicamente al país y que permitan la igualdad de oportunidades, el bienestar, la paz y la democracia.

Garzón propone un reordenamiento territorial, de conformidad con las costumbres y las potencialidades geográficas, y para ello está promoviendo la tesis de la creación de la Segunda República, asentada en regiones autónomas. Insiste en una reforma del Congreso, en la financiación total de las campañas políticas por parte del Estado con controles sociales y políticos, en el establecimiento de mecanismos democráticos que posibiliten el acceso de los ciudadanos a los cuerpos colegiados, en la reorganización autónoma de los partidos y movimientos políticos, en las garantías reales a la oposición y el acceso democrático a los medios de comunicación.

Para Luis Eduardo Garzón, el proceso de paz implica el rediseño de un nuevo Estado, y esto debe hacerse a través de una Asamblea Constituyente. Se trata de romper con una dinámica de exclusión en todos los órdenes de la vida nacional. La de Garzón es una candidatura que busca afirmarse como expresión de la

diferencia y de la posibilidad real de un proyecto político autónomo, no subordinado a los agentes de la política tradicional.

El objetivo central de una reforma política es, para Noemí Sanín, establecer una clara división entre el Ejecutivo y el Congreso, e incluso el aparato judicial, y terminar con el actual modelo bipartidista que estimula la corrupción. Ambos partidos, dice ella, son un partido, el partido de los contratistas. En cuanto al procedimiento, plantea que si el Congreso no la aprueba acudirá al plebiscito y al referendo y, en situación extrema, a una Constituyente: “con o sin Congreso haremos la reforma”.

En sus propias palabras, Horacio Serpa se propone hacer una reforma política, pero no en contra de los políticos, ya que eso, dice él, sería una grave equivocación. Va a involucrar a los políticos en la reforma. Para el candidato liberal, es una equivocación considerar al Congreso como un apéndice del Ejecutivo. Sostiene que no es inapropiado el funcionamiento del Congreso. La reforma política que propone no tiene la finalidad de revocar el mandato de los congresistas, pues los electores deben aprovechar las elecciones del 10 de marzo de 2002 para conformar un buen Congreso.

El Proceso de paz

En sus declaraciones los candidatos y las candidatas están de acuerdo con la negociación política del conflicto armado, sin condicionar la realización de las reformas económicas, sociales y políticas a que primero se haga el acuerdo con la insurgencia.

La realización de esas reformas y el fortalecimiento del Estado son considerados como requisito indispensable para lograr mayor legitimidad de las instituciones y poder así enfrentar en mejores condiciones la resolución del conflicto armado.

El candidato oficial del liberalismo afirma que puede ser al mismo tiempo el más dedicado defensor de la solución política del conflicto armado y, si así lo exigen las circunstancias, el más decidido adversario de las organizaciones armadas ilegales.

Uribe Vélez ha impactado con su anuncio de que la Fuerza Pública entrará a la zona de distensión el 8 de agosto de 2002, si la insurgencia no pacta otras reglas de juego y si no deja de utilizar El Caguán para actividades ilegales.

El candidato disidente del liberalismo considera prioritaria una política de seguridad democrática, uno de cuyos componentes es la “cooperación transparente de la ciudadanía con la fuerza pública”. Y explica: el ejercicio de la autoridad no se opone a la civilidad. En el país no hay violencia eficaz del Estado pero sí violencia eficaz de los poderes irregulares.

Noemí Sanín ha expresado: “No por estar negociando la paz se debe renunciar a la reconstrucción del Estado ni al ejercicio pleno de la autoridad ni a la legitimidad de la fuerza. Menos aún a su función social”.

Alvaro Uribe, Noemí Sanín, Horacio Serpa y Luis Eduardo Garzón han planteado la necesidad de reestructurar el actual proceso de paz. Consideran que se agotó la posibilidad de negociar en medio del conflicto, que se requiere acordar una tregua con cese al fuego y de hostilidades, que es necesaria la verificación internacional y que el gobierno tiene que condicionar el uso de la zona de distensión.

Nota del autor: Para la elaboración de este artículo se tuvieron en cuenta los pronunciamientos hechos por los candidatos y las candidatas, y textos de las páginas de internet de las candidaturas. En particular, sirvió como apoyo el reciente libro de Oscar Collazos, ***El Poder para quién*** (Aguilar, 2001).